

Destrabar la energía

Para que La Guajira materialice su potencial energético renovable, deben fluir las relaciones entre empresas, Estado y comunidades

Ayer, en medio de la visita del presidente de la República a La Guajira, se firmó el pacto por la Transición Energética Justa en La Guajira: 'La Guajira 2050, un territorio de vida para todos y todas'. El documento fue suscrito por el Gobierno Nacional, gremios y empresas de energía renovable, autoridades étnicas y entidades territoriales, e incorpora nueve acciones orientadas a mejorar las relaciones entre el Estado, las empresas y las comunidades wayús para avanzar en los proyectos energéticos actualmente en desarrollo en el departamento.

Si bien este pacto no genera obligaciones para los firmantes y se define como una "declaración de intención", su suscripción refleja la necesidad de superar el estancamiento de las iniciativas de energía solar y eólica en territorio guajiro. No obstante el gran potencial de la península en la generación eléctrica por el sol y el viento y de la presencia de más de 14 proyectos, los conflictos con los indígenas wayús y las demoras en los licenciamientos ambientales, entre otros problemas, amenazan hoy en día la entrada en operación de estos parques solares y eólicos.

De acuerdo con las cifras sectoriales, alrededor de 2.400 megavatios están a la espera de medidas que impulsen de manera efectiva la transición energética desde La Guajira. La mayoría de los 80 proyectos renovables en el país -un 65 por ciento- siguen en trámites y otros presentan serios retrasos en su puesta en marcha. Por esa razón, la noticia ayer de que la línea de interconexión Colectora, a cargo del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), protocolizó los acuerdos con 235 comunidades étnicas certificadas, es del mejor recibo ya que permitiría a este estratégico proyecto seguir con su li-

cenciamiento y, si todo sale bien, entrar a funcionamiento entre 2024 y 2025.

La firma de este pacto por la 'transición energética justa' apunta precisamente a fortalecer ese relacionamiento entre el Estado, las empresas y las comunidades wayús para destrabar el accidentado camino de estos proyectos renovables. Asimismo, incorpora la intención de aumentar la participación de los grupos étnicos, incluyendo "la participación en beneficios" y mejorar la respuesta institucional en el manejo de los conflictos, en la consulta previa y las licencias ambientales.

Tanto el avance de las consultas de Colectora como esta declaración de intenciones constituyen pasos en la dirección correcta. Para que La Guajira materialice ese gran potencial de generación de energías renovables se requiere que esas relaciones tripartitas entre el Gobierno nacional y local, las empresas desarrolladoras de los proyectos y las comunidades étnicas fluyan de una manera constructiva. Esto implica no solo la necesidad de generar espacios y oportunidades para los habitantes de la región sino también que estos contribuyan al avance de las iniciativas con peticiones sensatas y proporcionadas.

Es momento de que la administración Petro presione el acelerador en su política energética y pase de los discursos a las acciones y los avances en el desarrollo de los proyectos. El Foro Económico Mundial reportó ayer que Colombia cayó diez posiciones en su listado sobre transición precisamente por bajos puntajes en inversiones y en infraestructura. El diagnóstico está claro. La hoja de ruta, también. Garantizar que los esfuerzos coordinados empiecen a revertir indicadores como ese es prioritario.



Es momento de que la administración Petro acelere su política energética y pase de los discursos a los avances en el desarrollo de los proyectos.